

LA POLÍTICA ECONOMICA DE PINOCHET ES CONTRARIA A LA INDEPENDENCIA Y A LA SEGURIDAD NACIONAL

Nos dirigimos a ustedes, con el objeto de darles a conocer nuestra opinión sobre la situación económica que vive el país, calificada por el general Augusto Pinochet, como la de «cimientos más sólidos del presente siglo».

Seguramente cada uno de ustedes, al igual que la inmensa mayoría de los chilenos, palpa diariamente, ya sea en el almacén o en el metro, en las conversaciones callejeras o en las tiendas, en los cuarteles, en las poblaciones populares o de clase media, en el campo o en sus propios hogares, que la situación es absolutamente distinta a la que se describe en los discursos oficiales.

«La plata no alcanza para nada, los precios suben todos los días», o «mi marido sigue sin encontrar trabajo», o bien, «la fábrica donde trabaja mi esposo va a cerrar y él quedará cesante», son las expresiones simples que resumen la generalizada crisis económica que afecta a Chile.

El drama económico que vive el país no es casual. Es producto, fundamentalmente, del modelo que conscientemente aplica el régimen del general Pinochet. Allí, y no en otro lugar, hay que encontrar sus causas.

En su última exposición sobre el estado de la Hacienda Pública, el Ministro del ramo, Sergio de Castro, afirmó que ese modelo está permitiendo alcanzar uno de los objetivos fundamentales del gobierno: «el afianzamiento de la Independencia y la Seguridad Nacional».

Nosotros pensamos absolutamente lo contrario. Esta política compromete, gravemente, la Seguridad y la Independencia Nacional.

GIGANTESCO DEFICIT EN CUENTA CORRIENTE

El Ministro Sergio de Castro, intentó argumentar su afirmación, sosteniendo que durante 1978 «hemos logrado un superávit de más de 600 millones de dólares en la balanza de pagos».

Sin embargo, la verdad es otra. Uno de los aspectos más críticos de la situación económica del país, radica en el elevado déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que según reconoció el diario «El Mercurio», habría alcanzado, en 1978, a aproximadamente 830 millones de dólares.

Este fuerte déficit se financia con recursos externos proporcionados fundamentalmente por la banca norteamericana y, como el fenómeno tiende a ser crónico, la dependencia chilena de la banca privada es, en consecuencia, absoluta.

El propio Banco Central, indicó que un 90 por ciento de los créditos que recibió Chile entre enero y noviembre de 1978, provinieron de bancos e instituciones financieras privadas.

Por lo mismo, la deuda externa crece considerablemente, alcanzado al 30 de noviembre del año pasado, a 6.596 millones de dólares, incrementándose en apenas once

meses, en 1.163 millones de dólares. Diariamente, Pinochet se endeudó en el exterior, en 1978, en 3.623.000 dólares, siendo sus principales financistas, los más grandes centros bancarios norteamericanos.

La desmedrada situación en que queda el país en virtud de éste fenómeno, queda revelada por el hecho de que en los últimos años, y debido a la dimensión alcanzada por la deuda externa, entre un 45 y un 50 por ciento de las exportaciones totales, tienen que destinarse al servicio de la deuda externa.

El Banco Central ha debido aceptar la existencia de ésta anómala situación, al indicar en algunos informes que «organismos internacionales han opinado que una relación normal entre estos ítems (exportaciones y servicio de la deuda) debería ser entre un 15 y un 25 por ciento».

El alto déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos con que viene operando la economía chilena, revela la fragilidad externa a que ha llegado el gobierno de Pinochet, como resultado de las facilidades concedidas a la importación de mercancías extranjeras y del alto costo que tiene para el país el pago de intereses por su alto endeudamiento.

De acuerdo a cifras del Banco Central y de la Comisión Chilena del Cobre, los registros de importaciones cursados en 1978 en todo el país, aumentaron a 2.917 millones de dólares, contra 2.366,9 millones de dólares cursados en 1977; es decir, crecieron en un 23,3 por ciento.

Las exportaciones, en cambio, se incrementaron sólo en un 9,9 por ciento, porcentaje que disminuye casi totalmente, si se considera la devaluación sufrida en 1978 por el dólar. Su monto llegó así a 2.407 millones de dólares. De manera que el déficit comercial, medido en esta forma, supera los 500 millones de dólares.

En cuanto a la exportación de productos «no tradicionales», que según el régimen habría tenido en 1978 un fuerte crecimiento, su tendencia es al estancamiento.

La verdad es que aparte de tres productos con escaso valor agregado — frutas frescas, pino insigne y óxido de molibdeno — que crecen sensiblemente, en 1978 se produjo una caída del 0,3 por ciento en términos reales respecto a 1977, en lo que a exportaciones de esos productos se refiere.

El incremento de las compras en el exterior va en beneficio directo de las empresas foráneas, que entran a copar el mercado nacional, y de las firmas importadoras. Los mayores beneficiados son los consorcios transnacionales, en especial los de origen norteamericano.

El comercio exterior chileno observa un fuerte proceso de concentración y apenas en cinco países, se concentra más de la mitad de las exportaciones e importaciones que efectúa el país, destacando, especialmente, el que se lleva a cabo con Estados Unidos.

Casi el 25 por ciento de las importaciones totales provienen hoy de ese país, que a su vez, pasó a ser en 1978, el principal comprador de productos chilenos.

Es decir, son los monopolios transnacionales, particularmente los norteamericanos, los principales beneficiados por la política de comercio exterior de Pinochet, en desmedro de los productores nacionales.

FUERTE DEPRESION DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Augusto Pinochet, sus asesores y la prensa oficialista,

aseguran que la economía chilena se encuentra en «una franca etapa de despegue». Sin embargo, tales afirmaciones carecen de veracidad. Aunque el diario «El Mercurio» en su informe económico correspondiente a enero de 1979, exhibió como «prueba» de este despegue, el que «según las últimas estimaciones realizadas, la industria creció en un 10 por ciento», lo cierto es que esta misma cifra muestra que la actividad productiva — base de la economía del país — recién está alcanzando a los niveles que Chile tenía el terminar la década del 60.

El nivel de la producción industrial en 1978 — de acuerdo a cifras del INE — es inferior, si se considera el crecimiento señalado, en un 15,8 por ciento al logrado en 1972 y ni siquiera se equipara al alcanzando en 1970. ¿Se puede pues, hablar de «despegue»?

Estos bajos niveles de producción conducen a su vez, como lo señalara el profesor de la Universidad de Chile, Javier Cortés, a que, en agosto del año pasado, la capacidad industrial no utilizada del país llegara al 37 por ciento.

Este bajo nivel en la producción industrial obedece a dos causas principales.

Por un lado, es el resultado de la contracción que la política del gobierno ha impuesto en los niveles de consumo de la mayoría de la población, especialmente de los trabajadores, lo cual produce una severa disminución del mercado interno y afecta directamente a todas aquellas ramas que producen para atender las necesidades de consumo de los chilenos.

Por otro lado, el alto porcentaje de capacidad industrial no utilizada, encuentra sus raíces en las grandes facilidades otorgadas, por la dictadura del general Pinochet, para la importación de mercaderías sustitutivas de las producidas en el país.

Los niveles de protección en que se encuentra la industria nacional son inferiores, incluso, a los imperantes en los más poderosos centros del capitalismo mundial, acrecentando, por tanto, la desventajosa situación en que deben actuar muchas actividades económicas nacionales.

Se produce así el absurdo caso de que mientras el gobierno se ha propuesto — hasta junio del año en curso — reducir los aranceles a un nivel general del 10 por ciento, la tendencia en los países capitalistas desarrollados es a aumentarlos.

La de por sí delicada situación producida por esta anti-nacional política arancelaria se agrava aún más, ya que como constató CEPAL, en noviembre pasado, «la nueva política proteccionista de los países desarrollados no constituye un fenómeno aislado y transitorio», anticipando que el problema tiende a agudizarse puesto que «buena parte de los efectos de estas nuevas políticas todavía no se han producido, de modo que potencialmente la situación es todavía más seria. El sistema de restricciones comerciales, que está resultando — añade CEPAL — probablemente regirá por muchos años. Es claro el impacto negativo que este proteccionismo tiene sobre los esfuerzos de los países latinoamericanos por diversificar y dinamizar sus exportaciones».

A todo lo anteriormente descrito, hay que agregar que muchos productos extranjeros entran a competir con la producción nacional recibiendo de sus respectivos gobiernos incentivos especiales.

El sector de la construcción, por su parte, atraviesa por una crisis económica aún más aguda, aunque «El Mercurio»

indicó que en 1978, también tubo «un buen comportamiento.» La Cámara Chilena de la Construcción, con motivo de la realización de su Septuagésima Reunión, a fines del año pasado, denunció que el rubro «atraviesa por una larga y grave crisis», añadiendo que ella se refleja «en los niveles de desempleo, en la baja construcción de viviendas y en los insuficientes montos de inversión en obras públicas».

El año pasado, una vez más, se destinaron escasos recursos para la construcción de viviendas. Desde 1975, la inversión en el sector no supera el 1,49 por ciento del Producto Geográfico Bruto, en circunstancias que en los quince años anteriores, en promedio, ese porcentaje fue superior en casi el doble, alcanzando su máximo nivel durante el gobierno de la Unidad Popular, cuando llegó al 3,26 por ciento. Por ello no puede extrañar que el déficit habitacional, desde la instauración de la Junta Militar, crezca ininterrumpidamente, alcanzando a fines de 1978, según reconoció el propio «El Mercurio», la cifra récord de 695.732 viviendas.

Y como ODEPLAN ha calculado que el grupo familiar promedio está formado por 4,63 personas, la carencia de viviendas afecta nada menos que a 3.221.239 chilenos.

No es más alentador el cuadro que enfrentó el sector Obras Públicas. La inversión efectuada en 1978 ascendió apenas a 200 millones de dólares, mientras que la Cámara Chilena de la Construcción, indicó que «en tiempos normales, debe invertirse como mínimo, 400 millones de dólares».

Tan reducida es la cifra destinada al sector, que el Ministro de Obras Públicas del régimen fascista, Hugo León, reiteró, a fines del año último, que el éxito de su gestión «continúa midiéndose por las cosas que no hace».

Todo hace suponer que en 1979 el ministro León seguirá cosechando «éxitos», puesto que el presupuesto anual contempla gastos para Obras Públicas por un monto de 286 millones de dólares, cantidad inferior en casi un 30 por ciento a la estimada por la Cámara Chilena de la Construcción, como «mínima para invertir en tiempos normales».

En el sector agropecuario, en tanto, 1978 significó una baja sustancial en la producción de cultivos básicos para la alimentación de los chilenos, como resultado de la aplicación de la política de las llamadas «ventajas comparativas».

La agricultura sufre también los efectos del esquema que aplica el régimen de Pinochet, consistente en dejar sin protección al productor nacional y en estimular a grupos de importadores nacionales y a empresas extranjeras, para que coloquen en el mercado interno productos foráneos, en reemplazo de los nacionales.

Tales son, por ejemplo, los casos del trigo y la remolacha. La Asociación Nacional de Productores de Trigo, calcula que la cosecha de la temporada agrícola 1978-1979 llegará apenas a unas 600 mil toneladas, lo que obligará al país a realizar importaciones cercanas a 1.200.000 toneladas, para cubrir las necesidades internas.

Esta situación es particularmente grave, ya que en la temporada 1977-78, se había registrado ya una disminución de las cosechas, del orden del 26,8 por ciento.

Entretanto, las siembras de remolacha disminuyeron en la última temporada en más de un 20 por ciento, con el agravante que en la temporada anterior, ya se había regis-

trado una disminución del 62,5 por ciento en la superficie sembrada.

El gobierno — reflejando una antipatriótica conducta — se orienta a estimular el crecimiento de algunos pocos rubros de exportación, disminuyendo, a la vez, la producción de bienes fundamentales para la alimentación de los chilenos, los que ahora se importan.

Esta política, que perjudica al país y a la gran mayoría de la población en el campo, beneficia sin embargo a un reducido grupo de personas.

En el caso del trigo, los altos déficits en la producción tienen que ser cubiertos con importaciones, dejando al país a merced de los vaivenes del mercado internacional del producto y dependiente de los fuertes intereses económicos que controlan este mercado. Lo mismo vale para los otros productos del sector afectos a la misma política.

«Comprendemos perfectamente — denunció Carlos Podlech, Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Trigo — que sectores económicos se opongan tenazmente a que en Chile se produzca trigo, por cuanto el negociado de las importaciones de este cereal aumenta sus caudales de un día para otro en forma desmesurada, los que han transformado las importaciones en el negocio del siglo».

Mientras tanto, las grandes firmas comercializadoras del producto de los Estados Unidos, «hacen su agosto», ya que han entrado a cubrir casi en su totalidad el déficit triguero existente en el país.

En 1978, el 97,8 por ciento del trigo que se importó, esto es, 1.027.100 toneladas, se adquirieron a esas empresas, transformándose así Chile, en el segundo mercado más importante para las comercializadoras norteamericanas.

El carácter antinacional y antipatriótico del modelo impuesto en el sector agropecuario por el gobierno de Pinochet, no sólo acrecienta la dependencia respecto del capital extranjero, sino que, incluso, compromete gravemente el futuro de la Patria y sus habitantes.

En efecto, en un estudio realizado por el doctor Jorge Jiménez de la Jara en torno al problema nutricional en el país, se señala que «el déficit más importante es el de calorías, las cuales son obtenidas por la población chilena, fundamentalmente, de los alimentos derivados del trigo y en menor medida del azúcar».

Paralelamente, la política global aplicada en el sector agropecuario tiende a destruir la pequeña y mediana propiedad agrícola, con el objeto de restituir, en el menor plazo posible, el latifundio.

«Nosotros no podemos estar de acuerdo — dijo el presidente de los productores de trigo, Carlos Podlech — con esta forma de actuar de estos sectores económicos, que, incluso, nos han manifestado que el pequeño agricultor no debe existir por ser antieconómico y que prácticamente con el actual esquema debe desaparecer».

¿Es posible entonces hablar, como lo hace el Ministro de Castro, que la política económica en aplicación «afianza la Independencia y la Seguridad Nacional»; si ella deprime, en forma muy aguda su actividad productiva, si Chile cada vez más aumenta su grado de dependencia externa, y si no siquiera es capaz de garantizar vivienda mínima a la población o las más elementales obras de infraestructura; o por lo menos los alimentos fundamentales? Juzguen ustedes.

RETROCESO EN LA MINERÍA. ANTIPATRIÓTICA POLÍTICA ENERGÉTICA.

La minería en 1978 reflejó también la crisis económica generalizada que vive el país. No sólo se produjo una baja en la producción de cobre, sino que también se observaron notorios decrecimientos en el hierro, salitre, carbón, petróleo crudo y gas natural.

Entre enero y setiembre pasados, el cobre experimentó — según CODELCO — una baja en la producción del orden del 0,8 por ciento, respecto al mismo período del año anterior.

Mientras tanto, el hierro, entre enero y octubre bajó — según el INE y la CAP — en un 8,1 por ciento, respecto a los diez primeros meses de 1977. En ese mismo período, el salitre descendió — según ENAP — en un 1,9 por ciento. Entre enero y noviembre de 1978, respecto a los mismos meses de 1977 — de acuerdo a cifras del INE — la producción de carbón disminuyó en un 17,3 por ciento. La de petróleo, en el mismo lapso, lo hizo en un 12,1 por ciento, mientras que la de gas natural — según ENAP — bajó también, entre enero y noviembre de 1978, en un 8,8 por ciento, en comparación con los once primeros meses del año anterior.

En el caso del cobre, esta reducción en los niveles productivos se hará mucho más aguda en el curso del presente año, ya que la producción de la Gran Minería — tal como se ha anunciado oficialmente — bajará en 40 mil toneladas, como consecuencia de los reducidos niveles de inversión que se han registrado en conjunto en estos años en el sector, y debido a la irracional forma en que se han venido explotando los minerales.

En particular, el gobierno del general Pinochet se empenó, durante todo el año pasado, en llevar a la quiebra a la Empresa Nacional del Carbon, ENACAR y en reducir aún más su producción.

Sin embargo, y gracias fundamentalmente a la movilización de los trabajadores, hasta el momento la decisión no ha podido ser puesta completamente en práctica, aunque el peligro persiste. Una amenaza similar sufre SOQUIMICH.

De ponerse en práctica este antipatriótico plan, miles de trabajadores serán lanzados a la cesantía y las zonas del país que viven de la producción de carbón, recibirán un golpe mortal. Pero los daños que para Chile significaría una medida de éste tipo no terminan ahí. Al reducirse la explotación del mineral, Chile entra a depender aún más del suministro externo del petróleo, aumentando su dependencia de los grandes consorcios que controlan el mercado mundial capitalista de éste combustible, como ha quedado en evidencia en los primeros meses de este año.

En efecto, la fuerte ola especulativa que ha dominado en el curso de las últimas semanas en ese mercado, ha causado dañinas repercusiones a Chile.

El gerente comercial de la Empresa Nacional de Petróleos, René Olivares, admitió que, al momento de producirse esta oleada, el país tenía firmados convenios para la adquisición de tan sólo el 60 por ciento del total que requiere importar diariamente.

Por lo tanto, al producirse el alza de precios en el llamado mercado libre del petróleo, por irresponsabilidad del régimen, Chile ha tenido que adquirir a mayor precio 30 mil barriles por día.

Para aproximar en parte los graves daños que causa al país la política energética de Pinochet, basté señalar que sólo en 1978, Chile importó petróleo por una suma cercana a los 400 millones de dólares. El fuerte incremento de los precios en el mercado mundial permite anticipar que, este año, esa cifra puede ser aún mayor.

Esta situación hace particularmente insostenible que se pretenda disminuir la producción de carbón.

Cualquier política que se precie de nacional debe explotar al máximo los recursos carboníferos. Este es el esfuerzo que desarrolla la gran mayoría de los gobiernos del mundo.

La Agencia Internacional de Energía, ha sostenido que «el carbón debe ser utilizado como sustituto generalizado del petróleo durante el resto de éste siglo, para balancear las necesidades de energía».

Quiénes son, pues, los beneficiados con la liquidación de las actividades carboníferas del país? Ciertamente, los grandes consorcios que controlan el mercado internacional capitalista, así como los que abastecen el mercado interno del petróleo, y que han sido beneficiados por el gobierno, con la libertad de precios para varios combustibles: la EXXON, la SHELL y la COPEC, ésta última, controlada por el poderoso grupo financiero «Cruzat-Larrain».

Y a esto denomina el Ministro Sergio de Castro, «una política destinada a afianzar la Independencia y la Seguridad Nacional.»

«DESPEGUE» SIN INVERSION

De acuerdo a estimaciones del Taller de Coyuntura de la Universidad de Chile, en 1978 la tasa de inversión en el país alcanzó a poco más del 11 por ciento del producto. Frente a esta realidad, «El Mercurio «debió reconocer, en su balance económico de 1979, que» en comparación a las cifras históricas del país o a las de otras naciones latinoamericanas de rápido crecimiento, el coeficiente de inversión continúa siendo muy bajo».

Desde que en 1975 se pusiera en práctica la política del «shock», la tasa anual promedio de inversión es inferior a un 11 por ciento, en circunstancias que en América Latina se ha sobrepasado, hace ya años, como tasa promedio, la barrera del 20 por ciento.

Lo más significativo y grave, a la vez, es que el año pasado descendió abruptamente la importación de maquinarias y equipos. De acuerdo a datos del Banco Central, esa disminución llegó a un 12,8 por ciento, en los primeros nueve meses de 1978.

Para el Taller de Coyuntura de la Universidad de Chile, esta situación es extremadamente delicada, pues una caída de las importaciones de maquinarias y equipos, «representa un freno a la capacidad productiva futura del país».

Los bajos niveles de inversión, en general, son, en primer lugar, consecuencia de la contracción que la política de la dictadura ha impuesto a la inversión pública. Su reducción tampoco ha sido compensada, como esperaba el régimen, por la inversión privada.

El ahorro nacional continúa siendo escaso, destinándose además, en su mayor parte, por los clanes monopolísticos que lo controlan, a la adquisición de empresas estatales que se privatizan - con lo que no crean ninguna actividad nueva — o bien al especulativo mercado de capitales a corto plazo.

El gobierno del general Pinochet cifra todas sus esperanzas en que se produzca un incremento en la inversión extranjera directa, hecho que en 1978 no ocurrió, al igual que sucedió en años anteriores.

Estimaciones preliminares oficiales, indican que, en 1978, el volumen de las inversiones foráneas directas totalizó 163 millones de dólares, la mayor parte de los cuales corresponde a la adquisición — en condiciones lesivas para el interés nacional — de la mina «La Disputada», por el consorcio norteamericano EXXON. La operación tampoco generó una nueva actividad económica en el país.

Estos bajos niveles de inversión extranjera directa, son consecuencia de la política oficial sobre «ventajas comparativas» en particular, y resultado también del hecho de que la Junta Militar no ofrece ningún tipo de seguridad a la inversión extranjera, por su carácter eminentemente transitorio.

En todo caso, de producirse esta inversión, ella se dirigirá fundamentalmente al sector de las riquezas fundamentales básicas, como son, por ejemplo, el cobre y el petróleo. Este proceso de entrega, como todo el país sabe, está ya en su etapa inicial.

LA MAYOR TASA HISTORICA DE CESANTIA

Pero si todos los antecedentes entregados hasta ahora muestran el rotundo fracaso de la política económica de Pinochet, su mayor signo sin embargo, lo constituye la persistencia de las altas tasas de desocupación (las mayores en la historia de Chile desde que se llevan estadísticas sobre la materia), fenómeno constante en el esquema económico del régimen militar.

El desempleo en 1978 mantuvo los mismos altos niveles registrado en 1977, cuando de acuerdo a encuestas del I.N.E., alcanzó en promedio, en el Gran Santiago, al 13,85 por ciento. En 1978, según la misma fuente, fue de 13,75 por ciento. Las tasas de cesantía en los centros urbanos de provincias son aún mayores, según revelan estudios técnicos. Hasta el momento todas las medidas adoptadas por el régimen para reducir la cesantía han fracasado, incluyendo el llamado Plan Kelly. Y esto por la simple razón de que todas ellas parten de la fracasada teoría de que para disminuir la desocupación, deben contentarse aún más las remuneraciones, y darse nuevos privilegios a los grandes grupos económicos.

Es, por tanto, la propia política económica de Pinochet la responsable de los elevados índices de desocupación existentes. Y lo es a tal punto que el profesor de la Universidad de Chile Joseph Ramos, se preguntó en un estudio: «¿Que mayor signo de ineficiencia de un modelo o política económica puede haber que el que no se utilice el 13 por ciento de la fuerza de trabajo?»

Sin embargo, hay otras formas de desempleo disfrazado, como el Plan del Empleo mínimo, al que en 1978, según datos del Ministerio del Interior, se acogieron, en promedio, 145.742 personas; a éstas deben agregarse aquellas que trabajan ocasionalmente, los miles de trabajadores por cuenta propia que tienen menos ventas que antes, etc.

El profesor Ramos ha calculado que, en conjunto y considerando a todos estos trabajadores desocupados, «no es exagerado concluir que una subutilización sería debe afectar, fácilmente, el doble de los actualmente desocupados.»

Esto quiere decir, que la desocupación abierta y disfrazada, en conjunto afecta al 40 por ciento de la población activa.

¿Puede hablarse en estas condiciones, como lo hace Pinochet, que la economía del país tiene «los cimientos más sólidos del presente siglo?»

PINOCHET GOBIERNA PARA LA OLIGARQUIA FINANCIERA

La política económica del fascismo, junto con beneficiar al capital extranjero se aplica, además, en provecho de los grupos más poderosos de la oligarquía financiera interna, la que participa en forma cada vez más abierta en la gestión gubernamental.

Los cambios ministeriales realizados en diciembre último, mostraron, particularmente, la creciente participación en el gobierno del poderoso clan encabezado por Manuel Cruzat y Fernando Larrain, del que son miembros los ministros de Agricultura y Trabajo, Alfonso Marquez de la Plata y José Piñera, respectivamente.

Al amparo del régimen de Pinochet, el grupo «Cruzat-Larrain» ha incrementado fabulosamente sus riquezas. Los activos de sus empresas, como lo prueban sus propios balances, crecen espectacularmente, al igual que sus ganancias.

Este no es el único grupo que fortalece sus posiciones. También lo hace el que encabeza Javier Vial, que con las últimas ventas de acciones del poderoso Banco de Chile, realizadas por CORFO, ha afianzado su control sobre el más importante banco comercial privado del país, ratificando su condición de ser el más fuerte grupo nacional en el sector financiero.

Igualmente sacan provecho del esquema en aplicación, entre otros grupos, los clanes Matte, Edwards y Yauru.

Los recursos que controlan los grupos financieros han sido utilizados muy escasamente en la generación de nuevas actividades productivas; fuera de apropiarse de empresas estatales, destinan sus recursos, principalmente, hacia el mercado de capitales, el cual viene operando sobre bases fuertemente especulativas.

Es decir, la función económica que cumplen es marcadamente parasitaria.

El desmesurado desarrollo de un pequeño grupo de clanes financieros es posible en función del modelo económico que aplica la Junta Militar y se ve facilitado por la política oficial destinada a liquidar numerosas actividades económicas en manos del Estado, para ser transferidas al sector privado.

Este acelerado proceso, de desnacionalización de la economía, alcanza incluso a sectores básicos de la vida nacional, como la educación, el Servicio Nacional de Salud, Ferrocarriles del Estado, Línea Aérea Nacional, Empresa de Transportes Colectivos del Estado, etc.

Todos estos hechos demuestran que no se gobierna en favor de la independencia y la Seguridad Nacional, sino que se busca beneficiar al capital extranjero y a un reducido número de grandes grupos económicos nativos.

SALARIOS DE HAMBRE

Mientras un pequeño grupo de consorcios nacionales y

extranjeros aumenta cuantiosamente sus utilidades al amparo del esquema económico impuesto por Augusto Pinochet, la inmensa mayoría de los chilenos padece hambre y miseria.

En 1978, las tasas de explotación de los trabajadores se mantuvieron muy altas. Las remuneraciones ese año — si se toma como base el mes de julio — eran un 26,2 por ciento inferiores a las que se percibían como promedio el año 1972, e incluso, inferiores en un 12,8 por ciento a los sueldos y salarios de 1970.

A su vez, la mayoría de los artículos de consumo esenciales para la alimentación de los chilenos, sufrieron alzas de precios muy por encima del aumento del IPC, que es el índice que se utiliza para determinar los montos de remuneraciones.

Así, por ejemplo, y mientras el IPC se incrementó en un 30,3 por ciento, el precio del pan aumentó en un 68,5 por ciento, el arroz en un 124,1 por ciento, el litro de leche en un 57,4 por ciento, la parafina en un 80 por ciento, etc.

La propaganda justista, no obstante, asegura que en 1977 se produjo un incremento de un 25 por ciento de los salarios reales, fenómeno que se habría repetido en 1978 con un aumento entre el 13 y el 15 por ciento.

Lo cierto es que todos aquellos trabajadores que recibieron sólo reajustes iguales al alza del costo de la vida vieron deteriorada, en términos reales, su capacidad de consumo.

El sacerdote José Aldunate se ha encargado de demostrar que los niveles de sueldos y salarios siguen siendo muy inferiores a los existentes antes del golpe militar.

En efecto, establece que si el ingreso real en 1972 fue de 100, en 1978 apenas alcanzó a 61,4. «Es decir — añade — la gran mayoría de los trabajadores se debate aún en niveles absolutamente deprimidos de ingresos».

La pérdida sufrida por los trabajadores en estos años, por lo demás, la confirman los estudios publicados por especialistas del régimen.

El matutino «El Mercurio» ha informado recientemente que el índice de sueldos y salarios reales de 1978, considerando como tal el elaborado por el INE, deflactado en el crecimiento experimentado por el IPC estos años según un estudio del taller de coyuntura de la «U» de Chile es inferior en un 15,3 por ciento al existente en 1971.

Esta disminución en las remuneraciones se ha hecho con el objeto de producir fuertes tasas de acumulación en poder de los grandes grupos monopolísticos, lo que supuestamente, debiera permitir a éstos estimular la actividad económica.

Sin embargo, como se ha podido apreciar, los resultados son absolutamente distintos. Los índices de actividades económicas siguen deprimidos, además. Son cuantiosos los recursos que se sacan del país tanto por parte del gran capital extranjero, como por el interno.

Estos son los hechos. El modelo económico de Pinochet ha sumido a la inmensa mayoría de los chilenos en el hambre y la miseria. El país se mantiene en niveles de producción comparables a los existentes en los últimos años de la década del 60. La dependencia del capital extranjero es muy grande.

¿Esta es la política que el Ministro Sergio de Castro estima que «afianza la Independencia y la Seguridad Nacional?»